

EN EL NOMBRE DEL

PODER

POPULAR

CONSTITU-

YENTE

(CHILE, SIGLO XXI)

GABRIEL

SALAZAR

IV

Procesos

Del examen de los procesos constituyentes expuestos –sucintamente– más arriba, se desprende que el ejercicio del poder constituyente por parte del pueblo-ciudadano no es una operación simple, de fácil ejecución y puramente coyuntural.

A

Por una parte, porque, para que el poder constituyente exista *en* la ciudadanía como tal y sea una cualidad *de* ella, se requiere, previamente, un largo *proceso de autoeducación*, referido al desarrollo de un poder social diversificado y multidimensional. Se requiere que existan, en el pasado remoto y cercano, *experiencias de poder*. Memoria de esas experiencias. La seguridad (certeza) de que ese poder puede ejercerse de nuevo, en lo local, en lo regional o en lo nacional. En cualquier momento. Cuando sea necesario. Es decir: tiene que haber un proceso histórico previo (que puede ser relativamente largo) de ‘empoderamiento’ progresivo, que, al momento en que se precipite la coyuntura en que ese poder puede/debe ponerse en juego al todo o nada, no desaparezca tras eventuales derrotas político-militares, sino que, al revés, tenga la elasticidad y resiliencia necesarias para levantarse de nuevo y *reaparecer* insistiendo de otro modo o por otro flanco o a otro nivel. El

poder constituyente no puede entrar en acción, pues, si no existe en el pueblo-ciudadano lo que hoy algunos analistas denominan “capital-social” (popular) y otros “tradiciones cívicas”⁶. Si esta precondition no está, o existe en estado larvario, lo razonable parece ser que, en ese caso, es mejor intensificar el proceso de formación y potenciación de esas “tradiciones” antes de entrar en una acción decisiva.

Se observa que, cuando los “pueblos” derribaron a O’Higgins e iniciaron decisivamente un proceso constituyente, tenían siglos de experiencia en autogobierno local, donde operaban con un poder diversificado y multidimensional. Lo mismo, cuando los actores sociales, articulados entre sí, pusieron en acción hacia 1918 su poder legislativo dual, y luego su poder constituyente, tenían tras de sí un siglo de *poder social mutualizado*, que había alcanzado un grado significativo de diversificación (por ejemplo, en la docena de combinaciones mancomunales).

La cuestión es si hoy “nuestro” movimiento social-ciudadano tiene tras sí una masa suficiente de experiencias de poder, y si las hay, de qué “poder específico” se trata. Y, además, si está o no suficientemente diversificado como para proponerse administrar recursos comunales o nacionales (o sea: gobernar o cogobernar). Un “poder” constituyente que no tenga el respaldo de un poder social diversificado, probablemente inducirá a sus ciudadanos a *negociar* el ‘proceso’ constituyente con el sistema político

⁶ G. Salazar: “De la participación ciudadana: capital social constante y capital social variable”, en *Proposiciones* N° 28. Santiago: Ediciones SUR, 1998, pp. 58-83.

establecido, no a liderarlo y llevarlo a término por sí mismo... Tenemos hoy 40 años de experiencia en “gestas de autonomía” y en una “cultura identitaria” de gran fuerza expresiva y dinamismo sinérgico... ¿es suficiente para liderar un proceso constituyente? Sin duda, la sustancia madre del poder constituyente es la cultura social autogenerada. Hoy tenemos una buena dosis de ese tipo de cultura, pero ¿es suficiente para considerar que tenemos ya la “inteligencia” (Recabarren) que nos permita construir el Estado que queremos y, más encima, *gobernarlo desde abajo*?

B

Por otra parte, porque para dar los pasos decisivos hacia el *ejercicio concreto* del poder constituyente se requiere tener relativamente claro *cuál* es el grado de crisis que está debilitando el sistema dominante en ese momento, *qué* poder de resistencia es capaz de desplegar y *cómo* creemos que debiera ser el sistema político y económico que queremos construir. Los “pueblos” de la década de 1820 tuvieron la certeza de que la dictadura de O’Higgins había agotado su tiempo y su función, por tanto se movieron decididamente para derribarlo y luego construir el Estado, cuya forma ideal la tenían muy clara: era la que ellos mismos utilizaban en sus comunidades. Y se jugaron decididamente por un Estado orientado a la producción y a la participación ciudadana. Los actores sociales de 1920 tuvieron también la certeza de que el Estado de 1833 (mercantil y portaliano) estaba absolutamente fracasado hacia 1910, porque había crisis económica y crisis social y

política *terminales*. Por eso se movieron con toda decisión para organizar un Estado social-productivista y social-participativo (en correspondencia con los movimientos que se observaban por entonces en Alemania, Rusia y Japón).

En nuestro caso, hoy, siglo XXI, podemos reconocer que el Estado Neoliberal de 1980 nació *ilegítimo*, que *no* ha sido socialmente *eficiente* y que *carece* actualmente de credibilidad y representatividad. De acuerdo. Crisis estructural, aunque menos grosera y visible que la del Estado Liberal-Portaliano en 1910. Pero ¿tenemos claro qué Estado y/o Mercado queremos a cambio, no en lo general, sino en lo concreto?

Un movimiento social-ciudadano que tome como norte histórico el ejercicio efectivo del poder constituyente para construir un nuevo Estado, debería tener –según *se observa en los movimientos del pasado*– la suficiente consistencia multidimensional como para *ser por sí mismo una alternativa* al sistema político vigente. Eso le da la *continuidad* necesaria entre pasado y presente, entre su memoria acumulada y la realidad que quiere construir socialmente, entre su poder real y la tarea por realizar, *sin* tener que dar ese peligroso salto al vacío que va desde el mero descontento a la vaguedad de la utopía... La “revolución” es un proceso histórico que contiene una *cierta continuidad* dentro de la masa ciudadana que la realiza, en términos de memoria de poder, cultura social y capacidad de ejecución y administración. De no contenerla, arriesga, o bien “negociar” con el sistema dominante (frustrando o vendiendo el proyecto revolucionario), o bien depender

de la capacidad creativa y de choque de una “vanguardia” oligarquizada...

C

De lo anterior depende también la capacidad real del movimiento para organizar eficientemente una Asamblea *nacional*-constituyente (y no solo una Asamblea *popular*-constituyente). Porque a la capacidad para ejercer el poder *propio* debe agregarse la que le permitirá organizar y manejar, con éxito para sí, una Asamblea en la que deberán participar también *los otros*; esto es: los grupos medios y las elites empresariales, incluyendo los militares y los religiosos. El poder constituyente no es un poder armado que eliminará a los enemigos del pueblo-ciudadano, y su ejercicio no puede aspirar a establecer una dictadura de clase. En sí, específicamente, es un poder racional, que se vale de verdades objetivas y de acuerdos (de mayoría) intersubjetivos, en un campo de acción que no es otro que la *deliberación abierta*. Es una apuesta al triunfo de los argumentos socialmente convincentes. En este sentido, la argumentación se concibe como un arma que debería ser capaz, según se emplee y hacia qué áreas, de convencer y desarmar incluso a los aparatos armados de la nación. Basándose en los *hechos reales* (configurados como diagnósticos irrefutables) y en *soluciones adecuadas*, eficientes, propuestas por *la mayoría*.

Si el peso de la crisis (terminal) del sistema se refleja vivamente en la experiencia social y en los datos científicos que se exponen, los argumentos por el cambio

revolucionario deberían tener la fuerza necesaria para imponerse. Si, a su vez, el peso de las mayorías que están siendo víctimas de esa crisis se manifiesta a través de soluciones técnicas eficientes, la fuerza argumental debería imponerse, tarde o temprano. Es lo que vale en la deliberación ciudadana donde se juega todo eso.

Por eso la organización de la Asamblea Constituyente debe ser realizada conforme a criterios determinados impuestos, ejecutados y fiscalizados por *la misma ciudadanía*, sobre todo por la mayoría afectada o victimada por el sistema y/o por la crisis del mismo. Sería un error *delegar* esa tarea en una autoridad del sistema vigente (tener presente la felonía del presidente Alessandri Palma), o en los partidos políticos, o en el Parlamento del mismo sistema, pues todos ellos, según muestra la historia, no realizarán el cambio revolucionario del Estado que se necesita, sino una reforma limitada que les permita mantener el sistema antiguo pese a su crisis, a fin de seguir flotando en él como una hegemónica “clase política”. También sería un error organizar una Asamblea donde cada ciudadano se asuma como igual a otro, equiparados en el voto individual, porque la sociedad real, de hecho, es desigual, y está *estratificada* de modo que exista una elite hegemónica, unos grupos medios flotantes y una gran masa social precarizada o semiexcluida de los beneficios principales de la modernidad del momento.

En la década de 1820, los ciudadanos mantuvieron su organización en “pueblos”, y a partir de éstos, guardando las proporciones, designaron a sus representantes para la

Asamblea Nacional Constituyente. De ahí que la polarización se produjo entre la capital y los pueblos de provincia. En la década en torno a 1920, los ciudadanos mantuvieron su organización como “actores sociales” con presencia nacional (lo que implicaba reconocer la diferencia y estratificación social que existía en la nación), y seleccionaron a los delegados a la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales según coeficientes de proporcionalidad entre trabajadores (la mayoría), profesores, estudiantes y profesionales (con porcentajes menores). No hubo problemas.

Del mismo modo, la deliberación constituyente (debe deliberar siempre *toda* la ciudadanía, nunca grupos escogidos o impuestos) necesita realizarse a todo lo largo del país, para alcanzar un máximo posible de participación. En la década de 1820 el problema se resolvió fácilmente: se deliberó primero en la plaza pública de *cada pueblo*, y luego en una Asamblea que representó, proporcionalmente, a esos pueblos. En la década en torno a 1920, los actores sociales que tenían bases en todo el país (caso de la FOCH y de la AGPCH, esto es: los trabajadores y profesores federados), convocaron a “comicios” (asambleas locales) en sus sedes y en todo el país, tanto para acordar leyes de acción inmediata (AOAN), como para establecer las posiciones de base que se discutirían en la Asamblea Popular Constituyente (que tenía representación porcentual por tipo de actor social).

Es evidente que la Junta Militar de 1925 *no supo* (o no quiso) resolver el problema de cómo organizar la Asamblea Constituyente sobre una base estrictamente ciudadana,

como también es evidente que el presidente Alessandri Palma *traicionó y desechó el principio de la soberanía ciudadana* para organizar “comités constituyentes” al modo como los partidos parlamentarios designan de sus filas a los componentes de los comités del Senado o la Cámara de Diputados. La Junta no sabía interpretar la voluntad ciudadana, y Alessandri solo trató de interpretar (y proteger) la voluntad autoreferida de la clase política profesional...

Se deduce de lo anterior que, en la actualidad, la organización de una eventual Asamblea Nacional Constituyente debería excluir, desde la partida, las *dos* clases políticas (la civil y la militar), porque son las que más se benefician del régimen que, precisamente, se quiere abolir y cambiar. Y que, además, la elección de representantes para esa Asamblea debería combinar criterios *regionalistas* (no demográficos) y criterios *socio-métricos* (que reflejen la estratificación social existente en el país). Por último, debería realizar “comicios” (asambleas locales) en las *sedes de los actores sociales de presencia nacional* (caso de los trabajadores, los profesores, los empleados públicos y los estudiantes, sobre todo).

V

Construcción

¿Qué Estado?

En el pasado hablamos mucho de “lucha de clases”, de “sistema de dominación”, de “conquista del poder”, de “socialismo o comunismo” y, por cierto, de “reforma o revolución”, pero ¿hemos sabido alguna vez, con mediana claridad, *qué Estado* es el que queremos construir, o *cómo debe ser* un Estado “socialista”?

Y lo increíble es que, tras casi 200 años de lucha, hemos terminado siempre rigiéndonos por un Estado *liberal*, porque el de 1833 lo era, el de 1925 también, y el de 1980 es, por añadidura, *extremistamente neoliberal*... No hemos avanzado prácticamente nada, ni en imponer lo que, en su momento, queríamos, ni en recordar bien después qué queríamos, ni en saber exactamente por qué el Estado liberal “al cubo” nos ha tenido 200 años seguidos al borde de la crisis, al extremo de que nuestra Izquierda Parlamentaria se ha jugado (y juega) todo el tiempo para *entrar* al Estado vigente (liberal) y para hacernos creer que, ya incorporada (y aun mimetizada) en *ese* Estado, nos terminará resolviendo, gracias a su leal presencia dentro de él, *todos* nuestros problemas y miserias. Varios de nuestros presidentes más respetados: José Manuel Balmaceda, Pedro Aguirre Cerda, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens, intentaron gobernar para el pueblo (o para Chile) desde la cima

de esos Estados liberales, suicidándose, incluso, a nombre de su supuestamente legítima legalidad...

¿No hay algo que huele mal en todo esto?

¿Por qué nunca deliberamos en torno a la naturaleza del Estado que *no* queremos, y sobre la naturaleza del que *realmente* queremos? ¿Por qué no hemos escrito una sistemática historia crítica del Estado en Chile?

Es cierto que todos nuestros políticos y todos nuestros juriconsultos, cuando nos hablan con (supuesta) sabiduría sobre el Estado, nos han recitado siempre la misma letanía: que los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), que las facultades del Presidente, que las facultades del Congreso Nacional, que los requisitos de la ciudadanía, de las elecciones sobre la base del voto individual, de los partidos políticos que representan los distintos ángulos de la opinión ciudadana, etc. Es decir: nos hablan siempre de un *sistema político abstracto*, a-histórico, de una máquina que *absorbe opiniones de todo tipo*, de todos los sectores, las mismas que revuelve después como cotelera en el *juego competitivo* y cambiante de las mayorías parlamentarias, para evacuar, finalmente, leyes y decretos que resuelven los problemas en la “medida de lo posible”: *cocktails* que buscan saciar la sed de todos, en particular de los que pueden pagar la mayor cantidad de bebida estatal (o sea: por diputados y senadores)... En suma, nos hablan todo el tiempo del bendito Estado *liberal*...

El Estado liberal nació, como se sabe, en aquellos países (Inglaterra, Estados Unidos y Francia) donde la revolución industrial no solo estalló antes que en ninguna otra parte,

sino que también, totalmente, por *iniciativa privada*. Allí el Estado no tuvo, pues, que intervenir: se cruzó de brazos y “dejó hacer y dejó pasar” *liberalmente*. Sobre esas bases, los países mencionados pudieron expandir la civilización industrial por el mundo entero y construir verdaderos imperios industriales. Y para afianzar su dominación exigieron al resto de los países adoptar una política *libre-cambista* (puertas abiertas al industrialismo), mientras predicaban las bondades filosóficas del liberalismo puro y de la democracia liberal individualista. Allí, para esos países, el Estado liberal tenía y tiene razón *histórica* de ser... En cambio, para los países colonizados por Europa, antes o después de la Revolución Industrial, su *razón histórica de ser* les indicaba otra cosa: si querían industrializarse, debían luchar contra un mercado mundial dominado por las potencias anglosajonas, lo cual, si lo intentaban con arreglo al librecambismo, era muy difícil, si no imposible. Por tanto, necesitaban (y necesitaron) *otro tipo de Estado*, precisamente *no-liberal*, porque se dieron cuenta de que, para desarrollarse dentro de la civilización industrial en un plano de igualdad con las dichas potencias, debían hacerlo aplicando una potente *razón política*, nacionalista y unificadora de todas las energías y sectores de la nación. En este sentido, necesitaron un Estado *construido especialmente para realizar una tarea nacional* para cumplir un *mandato específico*: el desarrollo industrial y social, la modernización, el progreso neto. Era una necesidad relativa al bienestar de los pueblos, pero también a la necesidad de alcanzar un equilibrio geopolítico internacio-

nal razonable y justo. De no ser así, el retraso económico y social (por feudalismo, por economía primitiva, u otra razón) iba a reproducir y alargar la vida del *imperialismo colonialista*, un factor de desigualdad e injusticia para toda la humanidad.

De esa necesidad surgió el Estado estructurado para *realizar un mandato específico*: el desarrollo integral. No, por tanto, un espacio “abstracto” para que compitieran, conforme la ley, los intereses individuales de una sociedad ya desarrollada. Es lo que hicieron Japón, Alemania, Rusia, Italia, los países escandinavos, y más tarde China, el Sudeste Asiático, Corea, Israel, Sudáfrica, etc. En general, los Estados nacional-desarrollistas lograron su objetivo: todos los mencionados tienen, hoy, un alto estándar de vida. Ciertamente que algunos cometieron excesos condenables: o por exacerbar el nacionalismo a niveles intolerables (antisemitismo, antipalestinitismo, *apartheid*), o por sectarismo ideológico (stalinismo), o por expansionismo descontrolado (Japón en tiempos del Eje) y excesos dictatoriales. Sin embargo, allí donde no se perpetraron tales excesos (países escandinavos o del sudeste asiático, por ejemplo) el resultado fue exitoso en un sentido *más integral*. En Hispanoamérica hubo también varios intentos en este sentido, pero, o por impericia técnica, o por *cover action* del imperialismo liberal (E.E.UU.), o por un prematuro u oportunista juicio condenatorio de esta vía por parte de los defensores criollos del neoliberalismo, fracasaron. Está pendiente, en consecuencia, una *evaluación histórico-política rigurosa* de si efectivamente el nacional-desarrollismo de

América Latina fracasó por *agotamiento*, como se ha dicho, o no. Debe recordarse además que el imperialismo liberal condenó ideológicamente el nacional-desarrollismo, acusándolo de que negaba *la* libertad (“totalitarismo”), lo que fue causa de dos guerras mundiales (y una Fría). En Chile, la evaluación histórica definitiva de la vía nacional-desarrollista es tarea pendiente que atañe, sin duda, a la ciudadanía del siglo XXI.

Los Estados *no*-liberales también han tenido, pues, una razón histórica de ser y han sido, también, exitosos, tanto como para que varios de ellos sean hoy *genuinamente* neoliberales...

¿No es absurdo que en Chile sigamos insistiendo en un Estado liberal si nunca hemos logrado industrializarnos? ¿Si ninguna ex colonia se ha desarrollado bajo los principios librecambistas del Mercado?

Lo que necesitamos es un Estado que realice las tareas históricas que *no hemos realizado* en 200 años: a) una *industrialización razonable*, que nos permita exportar valores agregados (no puras materias primas), generar empleo estable (no trabajo precario de almacén), bases para el desarrollo de la ingeniería productiva y la innovación tecnológica, objetivos técnicos para la educación, etc.; b) una *ciudadanía* con la cultura, el poder diversificado y la capacidad administrativa necesaria para construir el Estado que necesita, controlar por abajo a sus representantes (gobernanza), que sobreponga el productivismo al mero consumismo, que sea realmente soberana, etc.; c) una *sociedad civil integrada* a un proyecto nacional de

desarrollo, sujeta a patrones de equidad y justicia social, más igualitaria y solidaria, capacitada para ajustar permanentemente el Estado y las clases políticas a sus necesidades y a su voluntad soberana, y d) un *sistema escolar* orientado a preparar nuestros niños a realizar con verdadero éxito las tareas a-b-c indicadas más arriba, *según* la realidad específica de Chile y *con* la comunidad específica de Chile, no copiando la masa y la mercancía cultural producida en otros países, que permita, por tanto, que la *comunidad real se eduque a sí misma*, dejando de lado la copia, la mera emulación y el consumismo educacional.

Si realizamos el inventario de las tareas históricas no realizadas en 200 años, podremos imaginar mejor cómo debe ser el Estado que construyamos para realizarlas. Si esas tareas deben ser acometidas desde las comunidades reales (locales), es evidente que son, ante todo, tareas ciudadanas, para facilitar las cuales debe pensarse, por tanto, en un Estado que ni sea liberal (porque hay un mandato que cumplir), ni centralizado, ni manejado arbitrariamente por ninguna clase política profesional. Lo demás es inteligencia práctica. Popular, por cierto.

VI

Enemigos

Los “grupos” que acechan y detienen la marcha histórica del poder popular constituyente son pocos. Pero, desafortunadamente, poderosos: manejan el poder constitucional de la nación y, lo que es peor, sus armas. Tienen, además, 200 años de experiencia en la materia. Son expertos. Son peligrosos.

Recordemos: manejan profesionalmente el fusil, la bayoneta, el corvo, la tortura y el asesinato. Y también –no lo olvidemos–, con extraño profesionalismo, el engaño, el disimulo, la traición y la felonía. Han dominado, entre ambos, el discurso oficial del Estado y también el de la Patria. Han construido por sí mismos la legalidad vigente. Se escudan detrás de todo eso. Se enriquecen y engordan a su sombra.

Son peligrosos.

Ya han partido, recién: agosto del 2011, señalando que “el plebiscito” es imposible (Andrés Zaldívar), que la “gratuidad de la educación” es imposible (Sergio Bitar), que si la policía no da abasto, “será necesario recurrir al Ejército” (Pablo Zalaquett). Y han comenzado a asociarse transversalmente, de Derecha a Izquierda, visitando el Palacio de Gobierno por turnos (donde vela, nervioso, un presidente de Derecha), alegando que “todo” debe decidirse en el Congreso Nacional, su casa (el legítimo “club de la pelea”);

que todos deben sentarse, allí a dialogar: es la mesa parlamentaria de todos... Por ahí empiezan. Seguirán tratando de adoptar para sí mismos el discurso rebelde e incluso el revolucionario, para colarse a la cabeza del movimiento y desde allí conducirlo. O sea frenarlo. Jugarán a líderes del pueblo. Hasta aparecerán, de vez en cuando, en los desfiles... Pero si les va mal y su miedo a la cesantía histórica sube vertiginosamente, ya no aumentará su grado de fiebre populista: mirarán entonces, de soslayo, a los cuarteles... Y hasta podrían lanzarles maíz... Y en ese punto, si el poder popular constituyente pasa del mero desfile al poder *dual*, es posible que hagan lo mismo que el ministro designado apresuradamente por el presidente Sanfuentes en 1919 (don Ladislao Errázuriz): inventarán cualquier peligro de guerra, externa o interna, para imponer la Ley Marcial, o el Estado de Sitio, y así justificar la represión militar...

No seamos ingenuos: la clase política civil, en momentos de peligro para ella (riesgo de cesantía histórica) se enlaza siempre con los militares en el minuetto del “enroque”, y aquéllos –que no han eliminado nunca de su cabeza la obsesión de que hay dentro de la nación un “enemigo interno”– se dejan tentar fácilmente por el peligro que amenaza a su consorte, y hacen entonces lo único que saben hacer: disparar y matar... No seamos ingenuos: los militares tienen intacta esa obsesión en su cabeza...

¿Qué hacer?

Lo único que puede hacer el pueblo soberano: mantenerse unido, *reeducar a la clase política militar y controlar desde abajo, férreamente* (como los “pueblos” en

1823) a sus representantes y delegados, a objeto de frenar e impedir su autotransformación (desintegrándola por “revocación”) en ‘clase política civil’. El mayor peligro para la soberanía popular proviene siempre de mercenarios (“rufianes que se venden a otros intereses”, decía Rousseau): sus pseudo-defensores ‘a sueldo’ y sus pseudo-representantes ‘a dieta millonaria’. El poder de la soberanía, capaz de neutralizar ese peligro es, en lo esencial, la cultura y la inteligencia sociales, su poder diversificado, que *no puede ser vencido* político-militarmente (ver más arriba), que es suficientemente flexible y resiliente como para levantarse una y otra vez, indoblegable. Su poder no es el arma militar ni el ataque directo destructivo, sino el éter envolvente y penetrante de la cultura, las ideas y el poder diversificado de la ciudadanía. Y por cierto: la crítica implacable, la propuesta insistente. Su fuerza está en lo inmaterial, por eso puede y debe plantear una radical transformación, no solo del sistema educacional civil, sino también del sistema educacional militar. Es la ciudadanía chilena la que debe estructurar y administrar *ambos* sistemas educativos, y no el Mercado o el Pentágono o el gran capital financiero internacional.

¿Nos hemos autoeducado suficientemente como para hacer *eso*?

¿Tenemos el poder cultural suficiente para bombardear el modelo neoliberal con críticas incisivas y propuestas inteligentes que nos aseguren la posibilidad de controlar todos los procesos y mecanismos desde abajo? Pues, de no tenerlo, tal vez es mejor continuar intensificando nuestro

proceso autoeducativo y acumulando 'experiencias de poder'. La debilidad en este plano puede facilitar considerablemente la maniobrabilidad experta de los 'mercenarios'...

A menos, claro, que, con lucidez relampagueante y audacia soberana, *acumulemos poder en corto tiempo* y madrugemos a nuestros obstáculos de siempre. Pero ¿cómo?

VII

Educación

Es bueno, en este punto, tener presente y considerar a dos actores sociales importantes, que han jugado y pueden jugar un papel relevante en los movimientos social-ciudadanos: el “bajo pueblo” y el profesorado básico y medio. Los mismos que, a menudo (o casi siempre), han sido olvidados por los historiadores y despreciados por los políticos “profesionales”.

Se denominó “bajo pueblo”, en el período colonial, a los grupos sociales que no eran “vecinos con casa poblada”; esto es: que no vivían en “pueblos” y no tenían, por tanto, la calidad de “ciudadanos”. En especial, los que quedaron estancados viviendo en esa situación (dispersos en “ranchos” de barro y ramas que levantaban en cualquier parte) pertenecían, en su mayor parte, al *pueblo mestizo*. El Derecho Imperial español se aplicó a españoles y criollos (en tanto tenían calidad de “vecinos”) y, bajo forma de Derecho Indiano, a los indígenas, a los que se les reconoció su derecho a vivir en “pueblos”, con capacidad de autogobierno (caciques) y propietarios de las tierras colindantes. Pero ese Derecho *no legisló nada respecto a los mestizos* y otras castas cruzadas (zambos, etc.), de modo que esos individuos no podían ser encomendados (no eran indígenas), ni encomenderos (no eran españoles o criollos), no podían tener cargos concejiles, ni ser sacerdotes, ni siquiera

formalmente “soldados”, etc. Si trabajaban, no existía una legislación laboral para ellos (para los indígenas, sí): quedaban sujetos, en la práctica, a la voluntad del patrón o a un ajuste verbal (“conchavamiento”) que podía ser desconocido o cambiado por el patrón en cualquier momento. El pueblo mestizo, por tanto, no recibió mercedes de tierras, no fue ni encomendero ni encomendado, no tuvo ningún estatus ni rol definidos, nada estructurado. Como se dijo entonces: eran hombres “sin Dios ni Ley”, gente sin derechos. Por tanto, esencialmente *abusables*, violables. No eran “pueblo” (solo los vecinos con casa poblada lo eran), razón por la que se les denominó “*bajo pueblo*”. Una masa marginal, afuerina, forastera, vagabunda, peligrosa. Por eso devino, poco a poco, en un “*enemigo interno*”.

En esa condición, su lucha por la subsistencia fue siempre difícil, marginal y riesgosa. Por lo mismo, no se casaban, no formaban familia: eran un pueblo de “*huachos*”. Por su origen, no tenían linaje, pero sí el estigma de no ser “hijos de familia”. No existiendo para ellos un derecho laboral racional sino un trabajo peonal forzado a pagas miserables, no tuvieron otro camino que robar (comida, animales, especies), saquear y jugarse la vida en una centenaria “*guerrilla de recursos*” con el sistema latifundista y con los mismos “pueblos” (el bandidaje se extendió desde 1760 hasta 1940, aproximadamente). En eso halló un aliado en el pueblo mapuche que, desde fines del siglo XVI, se enfrentó en una guerra intermitente con el “Reyno” de Chile y después con la República, que duró hasta fines del siglo XIX y que también devino en “*guerrilla de recursos*”. Naturalmente, esa lucha se tradujo en

una constante represión y persecución al pueblo mestizo, lo que lo dejó de hecho convertido en pueblo “proscrito”, sospechoso y criminal, lo que, a su vez, no le dejaba otra salida que insistir en la guerrilla de recursos.⁷

El *pueblo mestizo* ha sido el gran olvidado de nuestra historia. Se le llamó masa de “vagamundos mal entretenidos”, “vandalaje”, “rotos alzados”, masa de “peones-gañanes”, “bajo fondo”, “conventilleros”, “lumpen-proletariat”, “hampa”, “hez social”, “callamperos”, “pobladores”, “anti-sociales”, etc. Solo tardíamente, a mediados del siglo XX, se le concedió derecho a voto (individual). La Constitución de 1833 se lo negó explícitamente. Incluso los políticos e historiadores de Izquierda le han negado su *politicidad*, por no tener otra cualidad cívica que su “barbarie política”. La FOCH no lo consideró en nada. Todas las confederaciones sindicales posteriores (la CGT, la CTCH y la CUT) lo ignoraron y no buscaron nunca una asociación con ellos. Ningún partido de Izquierda ha planteado una teoría consistente de su situación. Son los parias de nuestra historia. Los “condenados de la tierra”.

Y sin embargo han constituido siempre la *mayoría de la población nacional*, la masa física del “pueblo”.

Y se han incorporado, por decisión propia, a las luchas políticas de la ciudadanía popular. No una vez: *todas las veces*, atacando sí directamente al “enemigo” donde más le duele: la propiedad. O sea: asaltando, robando, saqueando. Por eso mismo, se han llevado los peores castigos. Normalmente, son carne de cañón. Por este tipo de conducta de

⁷ Ver de G. Salazar: *Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular del siglo XIX*. Santiago: Ediciones SUR, 1985.

estos aliados, los actores cívicos de la Izquierda Parlamentaria, normalmente, retroceden (lo hicieron en 1851, 1859, 1905, 1957, 1972...), se apartan de ellos, los dejan solos...

¿Debemos descartarlos, juzgarlos o comprenderlos?

Es preciso tener presente que, si no viven en pueblos formales, si no tienen trabajo estable, si no llegan a educarse por completo, si viven al margen, si insisten en la ya multicentenaria “guerra de recursos”, si están proclives a la violencia, no es porque no tengan *razones objetivas y subjetivas* ni es porque no tengan *formas asociativas*, o no desarrollen entre ellos *camaradería y solidaridad*, o no tengan a su manera *comunidad* ni falta de “autonomía”. Tienen “*capital social*”, poderes “*diversificados*”, capacidad de acción. Todo eso y más...

Pero seguimos manteniéndolos como el “pueblo mestizo” que han sido siempre: rotos insolentes “sin Dios ni Ley”, bárbaros, antisociales.

¿No será tiempo de comprenderlos, de trabajar con ellos autoeducativamente en el desarrollo cívico de lo que realmente tienen: asociatividad, solidaridad, razones objetivas, identidades autónomas, poder local diversificado (cultural, productivo, de tráfico, delictivo, deportivo, comunitario, etc.)? Gran parte de la cultura propia que exhiben los actuales movimientos popular-ciudadanos en Chile proviene de la capacidad de autopotenciación de la cultura marginal. Siempre la cultura autóctona de este país ha salido de las redes y poblamientos del pueblo marginal...

Es el dilema que enfrenta, entre otras cosas, el sistema educativo nacional en el día de hoy. Ha existido 200

años enseñando a los chilenos las ciencias y las artes de la cultura occidental nórdica: la española, la francesa, la inglesa, la norteamericana, la taiwanesa, la finlandesa, pero nunca ha intentado educar a los chilenos en base a su propia realidad. Partiendo de la situación, por ejemplo, en que ha vivido 200 años el *pueblo marginal*, que ha sido siempre una abrumadora mayoría (hoy se les describe en función de su coeficiente ingreso/consumo: “quintiles 1 y 2”...). En cambio, hemos intentado educar a ese pueblo marginal en base a la cultura y las expectativas de *las elites mercantiles dominantes* y de sus socios comerciales de ultramar; o sea, según el mercado mundial.

Es tiempo de considerar también a los “maestros” (profesores de Básica y Media), que llevan 200 años “pasando la materia” que les viene de Occidente (del Norte), tratando de trepanar los cráneos de los niños marginales para embutirles una realidad pasada, presente y futura *que no es la de ellos*. ¿Por qué responsabilizar hoy a los profesores del rendimiento escolar del SIMCE o de la PSU y no a la *potencia cultural de la calle* donde los estudiantes mayoritariamente viven inmersos y que compite (con ventaja) con el aula? ¿Sobre todo en el caso de los niños del pueblo marginal?

Los profesores, al “pasar materias” (ajenas) educan para *imitar*. Y al hacer eso, solo ocupan la cuarta parte (25 %) de su capacidad instalada real, y la cuarta parte (25 %) de la capacidad real de los niños. Que la inteligencia real de los profesores es de 100 % y no de 25 %, está demostrado en su rendimiento neto cuando fueron estudiantes

universitarios. Y que la capacidad de los niños es de 100 % y no de 25 %, está demostrado de sobra en lo que hacen dentro de la “cultura de la calle”, donde viven y tienen identidad real.

¿Por qué no ocupar el 100 % de la inteligencia social de unos y de otros? ¿Por qué no educar *desde la realidad* de unos y de otros?

El profesor debe ser formado para “pasar materia”, sin duda (enseñar las ciencias occidentales), pero sobre todo para *investigar la realidad local* que rodea el proceso educativo y para *gestionar, dentro y fuera del aula, el desarrollo efectivo de esa realidad*. El profesor no puede dejar de ser un investigador de la realidad, un *autor* que publica y debate públicamente esas mismas investigaciones (puede enseñar mejor haciendo eso) y un profesional que se incorpora a la comunidad real como *gestor socio-cultural* de su desarrollo efectivo. Todo profesor debería tener esa triple formación y ejercer esa triple capacidad. Solo así se podrá unir el aula y la realidad concreta de la comunidad local en un mismo proceso educativo.

La soberanía ciudadana necesita activar sus procesos autoeducativos a todo nivel. Y solo uniendo ambos polos culturales—hoy separados y antagónicos—podrá articular los mecanismos socioculturales que cimentarán el desarrollo del poder social diversificado.

Para construir un nuevo Estado es necesario, prontamente, unir todos los cabos de ese poder...

La Reina, 4-15 de agosto de 2011